

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras

San Juan de Pasto, quince de junio de dos mil dieciseises

Se profiere la sentencia que en derecho corresponda dentro de la acción de Restitución de Tierras instaurada por **María Melida Ordoñez**, por conducto de apoderado designado a través de la **Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas¹**, respecto del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria **246-25704**, ubicado en el municipio El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, corregimiento de La Cueva, vereda La Victoria.

I. De la solicitud de Restitución o Formalización de Tierras

1.1 Fundamento Fático (vínculo con el predio y hechos victimizantes)

1.1.1 De la solicitud se extracta que **María Melida Ordoñez** se vinculó al predio ubicado en el municipio El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, corregimiento de La Cueva, vereda La Victoria, por donación que le hiciera su madre **María Dolores Ordoñez** el 12 de noviembre de 1975.

1.1.2 Se indica que el inmueble se identifica con la cédula catastral 52-258-00-01-0022-0108-000 a nombre de **Víctor Zambrano**, del cual no se encontró antecedentes registrales, por ende, afirma que la porción reclamada se trata de un bien baldío, en consecuencia el vínculo jurídico del solicitante con el predio es de *ocupante*.

1.1.3 Refiere que el *desplazamiento forzado* se llevó a cabo en la semana santa de 2003 a causa del miedo que les produjo los enfrentamientos ocurridos entre la guerrilla de las FARC EP y el Ejército Nacional, lo que conllevó a que abandonara su predio en la vereda La Victoria en compañía de su núcleo familiar, el cual para la fecha de su desplazamiento y según lo indica la Unidad de Restitución de Tierras estaba conformado por sus hijos **Inocencio Jurado**, **Luz María Adarme Ordoñez** y sus nietos **Andrés Felipe Adarme**, **Liliana Patricia Ordoñez Adarme** y **Anyi Cristina Adarme Ordoñez²**, en tal sentido debió desplazarse hasta la vereda Las Aradas donde se refugiaron en la casa del señor **Rodrigo Adarme** por un lapso de mes y medio aproximadamente y luego regresan a su predio en la vereda La Victoria de forma voluntaria y sin acompañamiento estatal.

1.2 Lo pretendido en la solicitud (síntesis).

¹ En adelante la *Unidad de Restitución de Tierras o UAEGRTD*.

² A folio 4 del cuaderno principal informa la Unidad de Tierras

1.2.1 Que se reconozca la calidad de víctima de abandono forzado al solicitante y su núcleo familiar, ordenando en tal sentido la restitución con vocación transformadora de conformidad con lo preceptuado por la Ley 1448 de 2011, como uno de los componentes de la reparación integral.

1.2.2 Que como medida de la reparación integral se ordene la *formalización* del predio sin denominación, ubicado en el municipio El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, corregimiento de La Cueva, vereda La Victoria.

1.2.3 En resumen, que se declaren todas las medidas de reparación y satisfacción integral en favor de la víctimas beneficiarias de la restitución o formalización de sus tierras, que propendan por el ejercicio, goce y estabilización de sus derechos consagrados por la Ley 1448 de 2011 en su Título IV.

II. Del trámite judicial de la solicitud.

La solicitud de restitución de tierras es radicada en este Despacho el 16 de diciembre de 2013, inicialmente se inadmite la acción por auto de 28 de enero de 2014³ y se concede término para que se corrijan las falencias anotadas. Una vez subsanada la demanda se admite por auto de 11 de marzo de 2014⁴, se dio cumplimiento a las formalidades de notificación y las consecuencias jurídicas previstas en los artículos 86 al 88 de la ley 1448⁵ y publicada en un diario de amplia circulación nacional el 17 de marzo del año en comento⁶. Posteriormente se dispuso la práctica de pruebas por auto del 10 de abril de 2014⁷, una vez evacuadas las mismas es procedente decidir de fondo el asunto.

III. De los Intervinientes

3.1 Procuraduría General de la Nación⁸

En su momento, el Agente del Ministerio Público deprecó la solicitud de acceder a las suplicas de la demanda por encontrarse debidamente probados los elementos de la acción de restitución de tierras, como son la calidad de víctima de la solicitante y su grupo familiar, la relación

³ A folios 86 a 90 del cuaderno principal obra la referida providencia

⁴ A folios 101 a 103 del cuaderno principal obra auto en comento

⁵ A folios 120 a 122 obra formulario de calificación y la constancia de inscripción proveniente de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (N) del folio de matrícula inmobiliaria No. 246-25704

⁶ A folio 126 del cuaderno principal obra documento en referencia

⁷ A folios 1 a 3 del cuaderno 2 obra auto de pruebas

⁸ En los folios 119 a 129 del cuaderno 2 de pruebas obra la réplica del Ministerio Público.

jurídica de esta con el predio, la situación jurídica del predio, el desplazamiento y la temporalidad consagrados en la ley 1448 de 2011.

IV. CONSIDERANDOS

4.1 Legitimación y competencia.

La competencia para asumir el conocimiento y decidir de fondo la solicitud de Restitución o Formalización de la tierra está determinada por la ausencia de opositores admitidos, así como por la ubicación del predio sin denominación, localizado en el municipio El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, corregimiento La Cueva, vereda La Victoria⁹.

4.2 Requisito de procedibilidad.

Se encuentra debidamente probado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 76 de la Ley 1448, tal y como se observa en la constancia de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente¹⁰ aportada con la demanda.

4.3 Problema Jurídico

Corresponde determinar si la parte accionante junto a su grupo familiar tiene derecho a la medida de reparación integral de restitución jurídica y material del predio objeto de las presentes diligencias.

4.4 Víctimas del conflicto armado interno y titulares del derecho a la restitución.

La Ley 1448 de 2011, fue pensada por el legislador para ser aplicada dentro de un rango de acción específico y frente a unos casos concretos, desarrollando así en su artículo 3° la conceptualización de quiénes son tenidos en cuenta como víctimas del conflicto armado interno y cobijados por la ley.

Principalmente se tiene que la aplicación del concepto de *víctima* está sin lugar a dudas estrechamente ligado a la noción de *daño*, como quiera que de la acreditación de su ocurrencia depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como *víctimas* y puedan acceder a los beneficios de la Ley 1448 de 2011¹¹.

⁹Al respecto ver artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011.

¹⁰ A folios 10 y 11 del cuaderno principal se encuentra la referida constancia

¹¹Así lo expuso la Corte Constitucional en Sentencia C-052 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla

Así las cosas, frente a dicha *condición de víctima* es importante resaltar que refiere a una situación de hecho [*fáctico*¹²] que surge como una circunstancia objetiva, dada la existencia de un *daño* ocurrido como consecuencia de los hechos previstos en el artículo 3° *ibidem*¹³; independientemente de que la víctima haya declarado y se encuentre inscrita en el Registro Único de Víctimas. En igual sentido se predica de la *condición de desplazado*, puesto que no se trata de una categoría legal sino de una identificación descriptiva de su situación, que se funda en unos hechos particulares.

De la ley se infiere que son *titulares del derecho a la restitución*¹⁴ todos aquellos sujetos que ostentan relación con el predio que se pretende restituir, bien sea como propietarios o poseedores, ora como explotadores de baldíos que propendan por su adjudicación, siempre y cuando estén dentro del contexto de *abandono forzado*¹⁵ o el *despojo*¹⁶, y que hayan sido consecuencia directa o indirecta de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con *ocasión del conflicto armado*¹⁷, entre el 1° de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley.

4.5 Reparación integral y derecho a la restitución de tierras.

La Ley 1448 de 2011 se erige como una salvaguarda de derechos en favor de las víctimas del conflicto armado interno, brindando como garantías medidas de atención, asistencia y reparación integral.

Dicha reparación integral entendida como el principal objetivo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se encamina a garantizar el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y la reparación con garantías de no repetición, lo cual se pretende alcanzar desde la máxima metodológica de cinco componentes específicos: la restitución, la indemnización, la satisfacción, la rehabilitación, y las garantías de no repetición de las conductas criminales.

¹²Sentencia C-715 de 2012

¹³Sentencia C-099 de 2013 y remite a interpretaciones hechas en Sentencias C-253 A de 2012, C-715 de 2012 y C-781 de 2012.

¹⁴Artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

¹⁵La definición de dicha situación se encuentra establecida en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011.

¹⁶*Ibidem*.

¹⁷*Esta expresión no se traduce en una noción restrictiva del concepto que se limite a acciones propiamente militares, por el contrario, opera en la Ley 1448 y en la doctrina de la Corte Constitucional, un criterio amplio de interpretación que no se queda en un solo tipo de accionar de los actores armados, o que utilicen un determinado armamento o medios de guerra, ni mucho menos se restringe a una determinada región específicamente. El marco del conflicto armado colombiano es complejo, especial y sui generis si se quiere, donde las organizaciones armadas a la par que pueden compartir territorios, pueden disputarse su control o establecer relaciones de confrontación o cooperación dependiendo de los intereses en juego, así como los métodos, armamentos o estrategias de combate, situación que conduce a que cada vez sea más delgada la línea que separa el lograr distinguir una víctima de la delincuencia común, o del conflicto armado, siendo que para ello se requiere un ejercicio juicioso de ponderación y valoración, en el cual, cuando exista duda, debe darse prevalencia a la interpretación que favorezca a la víctima. (Sentencia C-781 de 2012)*

En lo que respecta a la restitución la Corte Constitucional¹⁸ bajo los principios rectores de los desplazamientos internos¹⁹ y la declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas²⁰ se refirió al tema, reconociendo el derecho a la reubicación y restitución que tiene la población desplazada por haber sufrido el flagelo del *desarraigo* y *abandono* de sus tierras, lo cual conllevó *-en los desplazados-* a consecuencias como la inestabilidad social, laboral, económica y en el peor de los casos familiar. Así las cosas, el máximo tribunal apoyado en el Decreto 250 de 2005 definió que la restitución es un derecho fundamental que debe protegerse, por el Estado, con las garantías mínimas de restablecer lo perdido y regresar las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos, dentro de un marco de justicia restaurativa.

En igual sentido, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha establecido que ante la infracción a una obligación internacional debe repararse el daño, restituyendo a la víctima a la situación en que se encontraba antes de la vulneración de sus derechos *-restitutio in integrum-*; así mismo la ONU en sus Principios y Directrices Básicos del año 2006 refirió que la restitución consistía en “*devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario*”.²¹

4.6 La Restitución de Tierras y la Vocación transformadora.

La reparación con vocación de integralidad, como uno de los estándares de la justicia transicional es quizá el concepto más cambiante y adaptable a cada tipología o circunstancia en que se dé la transición, pues la noción clásica del derecho a la reparación desarrolla esencialmente el objetivo de restituir a la víctima a la situación en la que se encontraba antes de ocurrida la violación de sus derechos.

En Colombia, con la expedición de la Ley 1448 de 2011, se dio un vuelco a la perspectiva de reparación, no sólo porque se pretende ejecutar en medio del conflicto, sino porque en su artículo 25 se incluyó dentro del derecho a la reparación integral que las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º tenían derecho a ser reparadas de manera *transformadora*, con lo cual se quiere significar que la reparación debe ir más allá de la situación anterior a la ocurrencia de dichas violaciones y, bajo el acompañamiento del Estado

¹⁸Ver Sentencia T-159 de 2011.

¹⁹Principios Rectores de los Desplazados Internos, formulados en el año 1998 por el Secretario General de las N.U.

²⁰Sección II del documento.

²¹*Principio 19*, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales y derechos humanos y de violaciones graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147.

superar las condiciones de exclusión y marginalidad que estructuralmente han conllevado a la desigualdad social.

Para el caso, la restitución con criterio transformador también pretende ir más allá, pues fundada en su principio de *seguridad jurídica*²² propende por medio de la titulación de la propiedad de los predios, formalizar los derechos de las víctimas para con su tierra, conllevando así a la obligación judicial de resolver los asuntos jurídicos que atenten contra este principio-*seguridad jurídica*. En igual sentido, una vez transformada la informalidad de la relación de las víctimas con la tierra, debe pretenderse la reconstrucción de un proyecto de vida digno y estable en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas, ya que así se logrará dar cumplimiento a la vocación *transformadora de la reparación*, dentro de un concepto holístico de restitución, indemnización, satisfacción, y garantías de no repetición “a favor de la víctima dependiendo de la vulneración de sus derechos y las características del hecho victimizante”²³.

4.7 Enfoque de género en los procesos de restitución de tierras

Hace más de 60 años Colombia enfrenta uno de los conflictos más largos de la historia, un fenómeno estructural alimentado por la desigualdad social, la explotación económica y la exclusión política; trayendo como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos y el escalonamiento del conflicto armado interno que involucra mayores niveles de degradación del mismo en detrimento del respeto al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados.

Las mujeres enfrentan factores de vulnerabilidad específicos en contextos de conflicto armado, y en particular el desplazamiento forzado, que generan en ellas una afectación diferencial, específica y agudizada (Guzmán y Uprimmy, 2009), lo cual aunado a falta de políticas públicas conlleva a que no se logre desafectar el problema de género en el desplazamiento forzado.

La Corte Constitucional en el año 2008 mediante el auto 092, sentó un hito jurisprudencial en el país, ya que al poner de presente estas circunstancias y reconocer el estado de desventaja de las mujeres frente al desplazamiento, identificó diez riesgos de género específicos para valorar los factores que causan el desplazamiento forzado de mujeres, lo cual contribuyó a establecer un enfoque diferencial dentro del conflicto armado interno.

²²Artículo 73 de la Ley 1448 de 2011.

²³Artículo 69 de la Ley 1448 de 2011.

Dentro de dicha identificación la Corte Constitucional indicó el antecedente de desequilibrio histórico que han padecido las mujeres respecto a los hombres en cuanto a la propiedad de la tierra, el cual anida desde tiempos inmemorables en las estructuras sociales que enmarcan a Colombia, refiriendo así que, muy a pesar de que un número significativo de aquellas que habían sido incluidas en el Registro Único de Población Desplazada declararon haber sido propietarias de tierras, era una verdad suficientemente averiguada que las mujeres en Colombia accedían a la propiedad por intermedio de sus compañeros del sexo masculino, por tal razón terminan desligándose de todo vínculo o relación jurídica, comercial, laboral y cualquier tipo de información de la tierra que compete única y exclusivamente a quien provee el sustento económico, conllevando con esto a ser un blanco fácil del despojo.

Durante la última década se han adoptado Leyes y Decretos, y se han desarrollado políticas que protegen los derechos de los desplazados las cuales no han sido suficientes para afrontar desde lo holístico la problemática del desplazamiento de las mujeres y su derecho a la tierra, continuando sin zanjar la deuda que se tiene con las mujeres colombianas²⁴.

En el año 2011 el Gobierno Nacional promulgó la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mediante la cual le apuesta a resarcir judicial, administrativa, social y económicamente a las víctimas del conflicto armado interno, incluyendo la puesta en marcha del aparato jurisdiccional para lograr la restitución y formalización a todas aquellas víctimas del desplazamiento que tenían vínculos jurídicos con sus tierras y que sufrieron el flagelo del despojo o abandono de las mismas.

El tema de la restitución y formalización de las tierras de que trata la Ley, se erige como un mecanismo para cerrar la brecha de la informalidad de la propiedad en Colombia, así como lograr el retorno de los desplazados a sus tierras con una vocación transformadora que logre reactivar el agro en el país, y algunos que han sido más osados en el alcance y expectativas de la normativa llegan a considerarla como una reforma agraria.

Dentro de este contexto legal, y fundada en sus medidas reparadoras, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ciñe su aplicación a un enfoque diferencial de género, garantizando una protección especial a la mujer tanto en la etapa administrativa como judicial, debiendo los jueces especializados en restitución de tierras brindar prelación y primacía a las solicitudes presentadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en favor de una madre cabeza de familia o una mujer que haya sido despojada de su tierra, así mismo el legislador conminó al funcionario judicial a tener en cuenta al momento

²⁴ Entre otras, Ley 581 de 2000, Ley 823 de 2003 y Ley 1009 de 2006, Ley 1257 de 2008, así como Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura (Ver Acuerdo 4552 de 2008 y Acuerdo 9743 de 2012).

de ordenar en la sentencia la restitución o compensación, el incluir a la cónyuge o compañera permanente que se tenía al momento del desplazamiento, abandono o despojo.

4.8 De la ocupación de predios baldíos.

La Ley 1448 de 2011 en su artículo 72 establece como medidas de reparación para los desplazados las acciones de restitución jurídica y material del inmueble y en subsidio de las mismas la restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación.

Entiéndase la *restitución jurídica* del inmueble como la obligación de sanear la situación legal de la víctima con su tierra, bien como propietario, poseedor u ocupante, yendo en los dos últimos casos a la declaración de pertenencia o adjudicación, cuando se cumplan los requisitos legales; y la *restitución material* que es regresarle la mera tenencia física y el absoluto control directo a la víctima de su predio, garantizándole su retorno efectivo a fin de que haga uso de su bien, ya para explotación económica ora como vivienda.

Dicho artículo 72 *ibídem*, es claro en establecer que en el caso de predios baldíos²⁵ se proceda con la adjudicación del derecho de propiedad a favor de quien venía ejerciendo su explotación económica²⁶ si durante el despojo o abandono se cumplieron las condiciones para su adjudicación.

La Constitución Política en su artículo 228 establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia "*prevalecerá el derecho sustancial*", siendo este derecho sustancial o material como lo define *Rocco* (citado por la Corte Constitucional en Sentencia C-029 de 1995) aquel que determina el contenido, la materia, la sustancia, esto es, la finalidad de la actividad o función jurisdiccional. En este orden de ideas, el derecho procesal o formal tiene como finalidad la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial²⁷, en aras de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley.

Así las cosas, se tiene que la Ley 160 de 1994 (*norma de derecho sustancial*) fue reglamentada en el Capítulo V por el Decreto 2664 de 1994 (*norma de derecho procesal*) a fin de establecer los procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos, competencia que atañe al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural o entidades públicas en que se delegue la facultad de otorgar

²⁵El artículo 12 de la Resolución 70 de 2001 expedida por el IGAC define que los bienes baldíos "*son terrenos rurales que no han salido del patrimonio de la Nación, no han tenido un dueño particular y el Estado se los reserva. Se incluyen aquellos predios que, habiendo sido adjudicados, vuelven al dominio del Estado*"

²⁶Frente a la explotación el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 refiere que "*...si el despojo o el desplazamiento forzado perturbaron la explotación económica de un baldío, para la adjudicación de su derecho de dominio a favor del despojado no se tendrá en cuenta la duración de dicha explotación...*"

²⁷Artículo 4 del Código de Procedimiento Civil.

a nombre del Estado terrenos baldíos mediante título traslativo de dominio²⁸; sin embargo, como quiera que el legislador en la ley 1448 de 2011 previó que en los casos de bienes baldíos debía procederse con la adjudicación del derecho de propiedad siempre y cuando se cumplan las condiciones para la adjudicación, tales condiciones *no* pueden tomarse de la parte adjetiva reglada -*Capítulo V del Decreto 2664 de 1994*- dado que la misma contiene unas etapas que se ciñen única y exclusivamente a la entidad Estatal encargada de administrar las tierras baldías del Estado; por lo tanto, en cumplimiento del artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 y fundados en el principio de seguridad jurídica²⁹, se tendrán en cuenta, para efectos de la adjudicación de predios baldíos, las condiciones o requisitos esbozados por la norma sustancial y contemplados en la Ley 160 de 1994, a fin de determinar si es o no posible su adjudicación, en caso positivo deberá ordenarse al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural que proceda a expedir la respectiva resolución de adjudicación del predio³⁰.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 en concordancia con la Ley 160 de 1994, serán susceptibles de adjudicación los predios baldíos que cumplan con los siguientes requisitos: *i) que no exceda la Unidad Agrícola Familiar³¹ (art. 74 de la ley 1448 de 2011); ii) haber ocupado el predio por espacio no inferior a cinco años y haberlo explotado económicamente por termino igual (art. 69 de la Ley 160 de 2011)³²; iii) no tener un patrimonio neto superior a mil salarios mínimos mensuales legales (art. 71 de la Ley 160 de 2011); iv) dentro de los cinco años anteriores, no haber tenido la condición de funcionarios, contratistas o miembros de justas o consejos directivos de las entidades públicas que integran el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (art. 71 ibídem); y v) que el solicitante no sea propietario o poseedor, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional (art. 72 ut supra)³³.*

4.8 Del caso en concreto.

4.8.1 Contexto general de violencia del Municipio de El Tablón de Gómez del Departamento de Nariño – Vereda La Victoria.

²⁸Artículo 65 de la Ley 160 de 1994.

²⁹Numeral 5° del artículo 73 de la Ley 1448 de 2011.

³⁰Literal g del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

³¹Para tal fin debe tenerse en cuenta la excepciones que trata el Acuerdo 014 del 31 de agosto de 1995 mediante el cual se establecen las excepciones a la norma general que determina la titulación de los terrenos baldíos de la Nación en unidades agrícolas familiares.

³²Para el cumplimiento de éste requisito se debe tener en cuenta que si la explotación económica fue perturbada por el despojo o el desplazamiento NO se tendrá en cuenta dicha explotación –Art. 74 de la Ley 1448 de 2011-.

³³Teniendo en cuenta la excepción contenida en el artículo 11 del Decreto 982 de 1996.

Se tiene mediante informe rendido por la Unidad de Restitución de Tierras³⁴ que el Municipio de El Tablón de Gómez del Departamento de Nariño se encuentra ubicado a 62 kilómetros al norte de San Juan de Pasto-*Capital*-, en el macizo colombiano desde donde se desprenden las tres cordilleras; está conformado por cinco corregimientos así: *i) La Cueva* compuesta por las veredas La Victoria, Plan Aradas, Campo Alegre, Los Alpes y Pitalito alto y bajo; *ii) Las Mesas* por las veredas de El Silencio, Providencia, Valmaría, María Inmaculada, El Carmelo, La Florida, San Francisco, El Plan, Gavilla Alta y Baja, El Cedro, San Rafael, Doña Juana, Puerto Esperanza, El Porvenir, Las Yungas y Puerto Nuevo; *iii) Fátima* por las veredas Valencia, El Palmar, Loma Larga, La Esmeralda, Marcella y Llano Largo, *iv) Pompeya* con las veredas de El Gurango, Sinaí, La Isla, Juanoy Alto; y finalmente *v) la cabecera Municipal* con la vereda Belén.

En la vereda La Victoria se encuentran 250 viviendas distribuidas en cinco sectores denominados Centro, Granadillo, La Floresta, Bellavista y El Recuerdo.

La consolidación de los grupos subversivos en la región data desde los años ochenta, con la incursión del Ejército de Liberación Nacional -*ELN*- a través del municipio de El Tablón de Gómez, quienes posteriormente fueron suplidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -*FARC-EP*-, los cuales atraídos por el cultivo de la amapola de los migrantes cultivadores del Putumayo se establecieron en la región.

El control de los cultivos de amapola y el posicionamiento en la región por parte de las *FARC-EP* continuó durante los años noventa, en tal sentido lo aseveran el Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y el DIH (2002) y la Misión de Observación Electoral -*MOE*- (2008), continuando su relación directa con la economía del narcotráfico.

Para el 29 de agosto del año 2000 el grupo guerrillero de las *FARC-EP* decide atacar la estación de policía del Municipio del Tablón de Gómez destruyendo sus instalaciones, incursión que dejó heridos en ambos extremos del combate, como consecuencia de los hechos la fuerza pública abandona la región.

Ante la imponente ley del grupo guerrillero, dada la ausencia de la fuerza pública, construye carreteras que favorecen su actuar delictivo y establece campamentos base en la región, en el año 2002 secuestra a 16 jóvenes³⁵, estableciendo de tal forma el Municipio de El Tablón de Gómez como su centro de operaciones³⁶, para ese año -2002- con la ruptura de los diálogos de

³⁴Informe N° 001 de 2013 del conflicto armado en el corregimiento de la cueva, vereda la victoria del municipio de El Tablón de Gómez – Nariño- (obrante a folios 84 al 93 del cuaderno 1).

³⁵La Unidad de Restitución de Tierras cita archivo documental del periódico el tiempo.

³⁶Refiere la UAEGRTD que en el año 2002 las *FARC-EP* impidieron la jornada electoral.

paz del Caguán, los frentes 6, 8, las columnas Jacobo Arenas y Arturo Medina del Bloque Conjunto Occidente y el frente 2 del bloque sur, también arremetieron en contra de las poblaciones de Buesaco, San Pablo, el corregimiento de Génova de Colón, Potosí, El Bordo, Almaguer, San José de Albán, Bolívar (Cauca), Funes y La Cruz, ocasionando igualmente el retiro de la Policía de esta región.

En el año 2003 con el retorno de la Policía al Municipio de El Tablón de Gómez y la avanzada militar del Batallón Macheteros del Ejército Nacional a fin de combatir al frente 2 de las FARC-EP, se presentan combates en los sectores de La Victoria y Los Alpes, durante la semana santa de ese año-14 al 26 de abril-, con apoyo del avión fantasma, así mismo, en la misma fecha los pobladores aducen haber visto a la guerrilla con cilindros de gas y morteros artesanales, y refieren que los subversivos los alertaron sobre el enfrentamiento, lo que propició que las familias se desplazaran de sus viviendas, en una mayor cantidad al corregimiento de La Cueva y otros a Campo Alegre, Puerto Nuevo y Las Arandas, un grupo minoritario se desplaza a la ciudad de Pasto. Se registra que las personas de la vereda La Victoria retornaron en un periodo que va entre dos semanas y dos meses, sin embargo, existen personas que no han regresado, a la espera de condiciones adecuadas de seguridad.

4.8.2 Contexto individual de violencia del señor María Melida Ordoñez y su núcleo familiar.

De lo descrito y aportado en la solicitud se tiene que *María Melida Ordoñez* abandonó su predio durante la semana santa de 2003, junto con su núcleo familiar, por los enfrentamientos llevados a cabo entre el grupo subversivo y el ejército nacional, alojándose en la casa del señor *Rodrigo Adarme* localizada en la vereda Las Aradas del municipio de El Tablón de Gómez, así mismo se ratifica en el informe de caracterización contexto individual elaborado por la UAEGRTD³⁷ “...Pasaban las balas por encima de mi casa y llegó un señor a decir que teníamos que desocupar los sectores de la vereda, nos decía que desalojemos, que estábamos en peligro, me daba miedo, este señor vivía por la carretera, nosotros vivíamos más abajito, por eso los de por ahí se fueron todos, unos por una parte y otros por otra.... Me desplace desde la vereda la Victoria hacia la vereda Las Aradas con mis tres nietos y dos hijos llegando donde *Rodrigo Adarme*, él es familiar, permaneciendo tres semanas y luego me fui donde *Pablo Adarme* mi hermano durante un mes y medio. Esperamos hasta que pase el susto, ya decían que no había nadie en la vereda y nos tocó volver...”, y en igual sentido lo afirman los testimonios aportados por la Unidad de Restitución de Tierras de los señores: *María Josefina Ortega Martínez*, *Víctor Zambrano* y *José Domínguez Gómez* quienes aducen que la aquí solicitante *salió desplazada en abril de 2003* hacia la vereda Las Aradas durante

³⁷ A folios 29 a 33 del cuaderno principal obra el mentado informe.

un periodo aproximado de un mes y medio³⁸. El Despacho les asigna credibilidad a los declarantes por provenir de personas responsivas y explicar satisfactoriamente la ciencia de sus dichos, amén de no tener interés en el pleito, máxime cuando algunos de ellos se tratan de vecinos.

Así las cosas, se tiene que la información recaudada es consecuente con el contexto general de violencia, ya que para la fecha en que refiere la señora *María Melida Ordoñez* que abandonó su predio, el Batallón Macheteros del Cauca del Ejército Nacional incursionó a la zona con el objetivo de combatir el frente 2° de las FARC-EP presentándose enfrentamientos principalmente en los sectores de Campo Alegre y La Victoria.

Por tanto, la solicitante y su núcleo familiar, tuvieron la necesidad de abandonar el predio, desplazamiento ocurrido dentro del límite temporal que la ley establece para ser considerada no sólo como víctima, sino para estar legitimada en la acción de restitución; además, los hechos acaecidos se erigen de violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a normas internacionales de derechos humanos, ocurridos con ocasión del conflicto armado interno.

En consecuencia, la calidad de víctima al tenor del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, del solicitante y su núcleo familiar quedó plenamente establecida en el plenario sin que admita ninguna duda, siendo suficientes los elementos de juicio que permiten establecerlo. Aunado a lo anterior, se tiene que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV mediante Oficio No. 201472011126261 de 30 de Julio de 2014 informó que la solicitante y su hijo Inocencio Jurado se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas – RUV desde el 17 de julio del mismo año, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado por los hechos ocurridos el 18 de Abril de 2003.

4.8.3 Relación Jurídica de la señora María Melida Ordoñez con el predio objeto de Restitución.

Según se indica en la solicitud, la señora María Melida Ordoñez adquiere el predio ubicado en la vereda La Victoria, corregimiento de *La Cueva*, del Municipio de *El Tablón de Gómez* el 12 de noviembre de 1975 por donación que le hiciera su madre *María Dolores Ordoñez*, negocio jurídico que no fue protocolizado ni registrado ante la oficina correspondiente. El predio en mención, no reporta antecedente registral -según reporta la Unidad de Restitución de Tierras- concluyendo que el mismo se trata de un predio baldío.

³⁸ A folios 44 a 51 obran las declaraciones rendidas ante la UAEGRTD.

En consecuencia se procederá a establecer los requisitos sustanciales de que trata la Ley 160 de 1994 a fin de obtener la adjudicación de que trata su artículo 72.

De conformidad con el informe técnico predial aportado por la Unidad de Restitución de Tierras se tiene que el predio solicitado tiene un área de 941 m², lo cual no excede la Unidad Agrícola Familiar³⁹ establecida para la ubicación del predio.

El predio se ha utilizado desde su obtención, con plantaciones con café, maíz y árboles frutales⁴⁰, en tal sentido el Acuerdo 014 del 31 de agosto de 1995 mediante el cual se establecen las excepciones a la norma general que determina la titulación de los terrenos baldíos de la Nación en unidades agrícolas familiares resolvió en su numeral segundo del artículo primero que *“Cuando se trate de la titulación de lotes de terrenos baldíos en áreas rurales, destinados principalmente a habitaciones campesinas y pequeñas explotaciones agropecuarias anexas, siempre que se establezca por el Instituto que los ingresos familiares del solicitante son inferiores a los determinados para la unidad agrícola familiar.”*

En cuanto al requisito de no tener un patrimonio neto superior a mil salarios mínimos mensuales legales, obra a los folios 77 y 78 del cuaderno principal respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN que certifica que *no* se encuentran registros de la solicitante, por cuanto se entiende cumplido el formalismo.

Por último, es de destacar que según consulta en el Sistema Información Registral aportada a folio 96 del cuaderno principal se tiene que la solicitante *María Melida Ordoñez*, no es propietaria o poseedora a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional, así mismo, mediante escrito proveniente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder que obra a folios 62 y 72 del cuaderno de pruebas certifica que la accionante no han sido beneficiaria del proceso administrativo de adjudicación de baldíos, por lo tanto se entiende cumplido el mentado requisito legal.

Frente al cumplimiento del requisito de que lo adjudicado no supere la Unidad Agrícola Familiar, se tiene que para el caso en concreto, es decir para el municipio de El Tablón de Gómez se encuentra clasificado en la Zona Relativamente Homogénea No. 6 Zona Andina, en la que se establece que la UAF para clima medio se encuentra en el rango de 17 y 24 Has⁴¹, de tal forma que la solicitante pretende la formalización de 941 m², área que no supera el límite legal establecido.

³⁹ Información contenida en la Resolución 041 de 1996, artículo 21 Incora

⁴⁰ Obra a folios 34 a 36 del cuaderno principal Formato Análisis de Contexto de Solicitud.

⁴¹ Información contenida en la Resolución 041 de 1996, artículo 21 Incora

En suma, se encuentran cumplidos los requisitos sustanciales para la adjudicación del predio sin denominación ubicado en la vereda La Victoria, corregimiento de La Cueva, del Municipio de El Tablón de Gómez, en consecuencia, como garantía de la *restitución jurídica* del bien se ordenará al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural para que realice la respectiva adjudicación en favor de *María Melida Ordoñez*.

4.8.4 Del enfoque diferencial de género.

Se tiene del plenario demostrado que la solicitante del presente proceso de Restitución de Tierras, la señora María Melida Ordoñez es una persona mayor víctima del desplazamiento forzado, lo cual conlleva a un grado alto de vulnerabilidad y la hace distinta a los demás sujetos que están también en situación de desplazamiento.

Las personas mayores que se encuentran dentro de esta característica *-desplazamiento-* son víctimas que denotan mayores riesgos y vulnerabilidades en el conjunto poblacional de desplazados por el conflicto armado interno de Colombia, pues al igual que los menores de 18 años, son considerados como dependientes, demográfica y socioeconómicamente; dada su limitada capacidad de resistir, pues no cuentan con la facilidad para reorganizar su proyecto de vida, luego de haber sido despojados de aquello que durante años habían construido.

El enfoque diferencia de edad en persona mayor implica el reconocimiento de políticas, programas, acciones y gestiones desarrolladas por entes públicos o privados, pues todo aquel mayor de 60 años⁴² le surgen necesidades particulares, aunado a que sus condiciones son especialmente difíciles, como lo es que pierden rápidamente oportunidades laborales, actividad social y capacidad de socialización y, en muchos casos, son discriminados y excluidos.

Por tal razón, coexiste la necesidad de una política diferencial y preferencial que pueda atender y reparar a las personas mayores, que genere condiciones especiales de empleo, educación, socialización, atención de enfermedades propias de la edad y pensiones especiales por su condición.

En este orden de ideas; se tiene que la condición especial de la solicitante, de mujer víctima y persona mayor, es de origen *supralegal* la cual se desprende de lo dispuesto en los artículos 13, 43 y 46 de la Constitución Política.

⁴² En el plano internacional se conocen diferentes categorías a fin de reconocer las necesidades de cada persona por su rango de edad, se tiene como persona de edad (60-70 años), persona de edad avanzada (70-80 años), persona de edad muy avanzada (80 años o más).

De igual forma, la Ley 1448 de 2011 consagra en su artículo 13 la aplicación del enfoque diferencial que se reconoce a la población con la característica particular en razón de su edad y género, debiendo brindarse garantías y medidas de protección especiales a dicho grupo de personas a fin de que contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

La norma en cita, en sus artículos 114 al 118 dispone del tratamiento especial para las mujeres en los procesos de restitución de tierras, para el caso concreto de la parte judicial el artículo 115 entraña una prelación frente a la sustanciación de procesos donde las solicitantes sean madres cabezas de familia y de mujeres desplazadas.

Así las cosas, el reconocimiento que se hace a la señora *María Melida Ordoñez* vira en torno a dignificar el papel de la mujer víctima y persona mayor en la sociedad, condición especial, concretada en su responsabilidad individual y solitaria, situación que amerita medidas afirmativas para garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condición para los géneros.

4.8.5 Medidas de reparación integral en favor de María Melida Ordoñez y su núcleo familiar.

Sobre este aspecto, se hace necesario, para efectos de que se le garantice el ejercicio y goce de los derechos reconocidos al desplazado en virtud de la restitución, tomar las decisiones encaminadas a la no repetición de los hechos generadores de violencia.

En el plenario se han trasladado varios informes por parte de las entidades involucradas, quienes han puesto en conocimiento de este Juzgado los programas y planes generales y específicos que tienen para efectos de hacer efectiva la atención a la población que habita en el corregimiento de La Cueva del municipio de Tablón de Gómez, los cuales obran en el cuaderno de pruebas. Bajo ese entendido se generarán las órdenes que se consideran pertinentes y su implementación se hará conforme las condiciones así lo permitan, no sin antes advertir que para la incorporación de las víctimas a los diferentes planes y programas previstos por el Estado, si bien se supeditan a la gradualidad y al cumplimiento de requisitos legales y administrativos, debe garantizarse su priorización de acuerdo con los parámetros de enfoque diferencial.

Esta Judicatura tomará las decisiones tendientes a garantizar los derechos de restitución que le incumben a la solicitante. Ahora bien, en lo que concierne a las medidas de carácter general para la población de la vereda La Victoria Corregimiento de La Cueva municipio de El Tablón de Gómez, este Juzgado ya se ha pronunciado en sentencia del 28 de marzo de 2014 dentro del

proceso de restitución y formalización de tierras No. 2013-00099, en el ordenamiento DECIMO, dentro de cuyas órdenes se entienden incluidos la solicitante y su familia, por haber sufrido los mismos hechos de violencia y haberlo acreditado ante esta Autoridad Judicial.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de San Juan de Pasto**, administrando justicia en nombre de la República y con la autoridad constitucional y legal,

RESUELVE

Primero. RECONOCER a la señora **María Melida Ordoñez** identificada con la Cédula de Ciudadanía N° **27.189.009**, la calidad de *mujer víctima y persona mayor* a fin de que se garantice por parte del Estado una atención con enfoque diferencial de edad y género; de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.

Segundo. RECONOCER Y PROTEGER el derecho a la *restitución y formalización* a favor de **María Melida Ordoñez** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.189.009**, en relación con el predio “sin denominación”, ubicado en el municipio El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, corregimiento de La Cueva, vereda La Victoria.

Tercero. ORDENAR a la **Agencia Nacional de Tierras**, que dentro del plazo máximo de quince días, siguientes a la notificación de esta providencia, expida el acto administrativo de adjudicación a favor de **María Melida Ordoñez** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.189.009** del predio baldío sin denominación, ubicado en el municipio El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, corregimiento de La Cueva, vereda La Victoria, de conformidad con la parte considerativa. *Adjúntese por secretaría copia del informe técnico predial y de georreferenciación remitido por la Unidad de Restitución de Tierras.*

Parágrafo: Surtida la notificación de la Resolución deberá proceder con su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria N° **246-25704** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Cruz - Nariño.

Cuarto. ORDENAR al **Registrador de Instrumentos Públicos de la Cruz - Nariño**, que una vez cumplido lo dispuesto en el numeral anterior y dentro del término de los cinco días siguientes contados desde la notificación de esta providencia, *inscriba* en el folio de matrícula inmobiliaria N° **246-25704** la presente sentencia.

Así mismo y dentro del mismo término, **cancelará** las anotaciones números 3, 4 y 5 del mentado folio, y procederá a **inscribir** la prohibición de enajenación a cualquier título y por cualquier acto el bien inmueble, por un lapso de dos años contados desde la ejecutoria del fallo, conforme a lo establecido por el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011.

En igual sentido, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1579 del 1 de octubre de 2012, a fin de que se proceda con la actualización de la ficha catastral del inmueble distinguido con el número predial 52-258-00-01-0022-0108-000, ante la entidad competente **-Instituto Geográfico Agustín Codazzi-**, una vez cumplido este procedimiento deberá **rendirse informe** al Juzgado en un término máximo de tres días.

Quinto. ORDENAR a la **Alcaldía Municipal de El Tablón de Gómez**, aplique a favor de **María Melida Ordoñez** identificada con cédula de ciudadanía N° 27.189.009, la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras contribuciones, contempladas en el Acuerdo No. 022 del 15 de agosto de 2013, en relación con el predio objeto del presente proceso de restitución de tierras.

En igual sentido, deberá a través de su **Secretaría de Salud**, garantizar la cobertura de asistencia en salud y programas de **"Colombia mayor"**, a **María Melida Ordoñez** identificada con cédula de ciudadanía N° 27.189.009 y su **núcleo familiar**, en caso de que aún no se encuentren incluidos en dicho sistema, y puedan ser beneficiarios del sistema de salud subsidiado, de ser el caso. Debiendo rendir ante este Juzgado un informe detallado del avance de la gestión dentro del término de quince días, contados desde la notificación del presente proveído.

Sexto. ORDENAR a la **Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente** para que a través del **Equipo Técnico de Proyectos Productivos**, dentro del término de **treinta días** contados a partir de la comunicación de la presente sentencia, realicen el estudio de viabilidad para el diseño e implementación **-por una sola vez-**, del proyecto productivo integral en favor de **María Melida Ordoñez** identificada con cédula de ciudadanía N° 27.189.009 y su núcleo familiar.

Una vez finalizado el término indicado deberán rendir, a este Juzgado, un informe detallado del avance de gestión.

Séptimo. ORDENAR al **Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-** que dentro del plazo máximo de quince días, siguientes a la notificación de esta providencia, ingrese **-a la solicitante y su núcleo familiar-**, **sin costo alguno**, a los programas de formación y

capacitación técnica que tengan implementados y que les pueda servir para su auto sostenimiento.

Octavo. ORDENAR al *Ministerio de Salud y Protección Social y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV* la inclusión de *María Melida Ordoñez* identificada con cédula de ciudadanía N° 27.189.009 y su núcleo familiar, en el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI), en sus modalidades individual, familiar y comunitaria respectivamente, con el fin de que puedan superar el impacto causado por los hechos victimizantes.

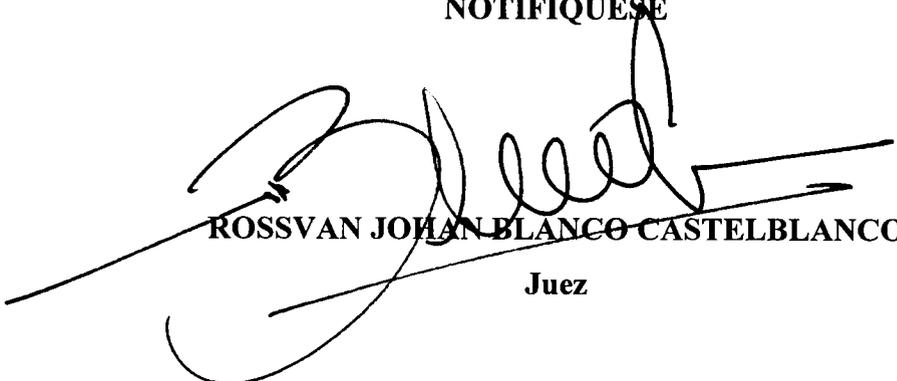
Noveno. ORDENAR remitir copia de la presente sentencia al *Centro de Memoria Histórica* para que en el marco de sus funciones *acopie y documente* los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno descritos en la presente decisión.

Décimo. ORDENAR al *Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Banco Agrario de Colombia*, que en el término de *treinta días* contados desde la comunicación de la presente orden, incluyan, de ser viable, en forma prioritaria a la solicitante y su núcleo familiar, al acceso preferente de los programas de subsidio para mejoramiento de vivienda o programas de vivienda rural *-por una sola vez-* que adelante el Gobierno Nacional. Vencido el término deberá rendir, a este Juzgado, un informe detallado del avance de gestión.

Undécimo. RECONOCER personería a la abogada *Erika Medina Mera* distinguido con la T.P. No. 172.476 del C.S. de la J. en los términos y para los efectos del poder conferido

Décimo Primero: Respecto a las demás medidas destinadas a la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas en el Corregimiento de la Cueva del Municipio de Tablón de Gómez - Nariño, estese a lo resuelto en el ordenamiento Décimo de la sentencia del 28 de marzo de 2014 dentro del proceso de restitución de tierras No. 2013 – 00099, proferida por este Juzgado.

NOTIFÍQUESE


ROSSVAN JOHAN BLANCO CASTELBLANCO

Juez